

Un 70% de los trabajadores de la enseñanza se sumó a la huelga

Un 70% de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza se sumaron a la huelga general del pasado 29 de marzo convocada por las federaciones de Enseñanza de CCOO y UGT y STES-i para protestar contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno que supone un ataque sin precedentes a la protección social de los trabajadores. El paro tuvo una incidencia en el sector educativo de cerca un 90%, en cuanto a centros escolares cerrados y alumnado sin clase.

FUE EN el sector universitario donde la huelga tuvo una mayor incidencia, con el 85%, de los 91.877 docentes de la universidad pública y 12.108 de la privada, y el 80% del Personal de Administración y Servicios.

En la enseñanza pública no universitaria, la jornada de huelga fue respaldada por el 70% del profesorado y por el 45% en la enseñanza privada. Se sumaron al paro entre un 60 y un 70% de los trabajadores en Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Murcia y País Valenciano. En Aragón (73%), Canarias y Cataluña el 75%, resaltando la alta participación de Euskadi, Galicia y Navarra con el 80%.

Entre el 25 y el 55% del colectivo se sumó a la huelga en las comunidades de Castilla la Mancha (55%), Extremadura (45%), La Rioja (35%) y finalmente Ceuta y Melilla con un 30% y 25% respectivamente.

Los sindicatos han advertido que la protesta del día 29 debe servir para que el Gobierno se replantee sus políticas económicas, sin restricciones en los derechos laborales y sociales y considerando a la educación como una inversión de futuro.

FETE-UGT, CCOO y STES-i lamentaron que organizaciones sindicales que se definen como independientes y que presumen de defender los intereses corporativos de los docentes faciliten con la actitud demostrada en esta jornada de huelga que el gobierno continúe en su política de recortes salariales y sociales.

Unánime protesta contra los recortes educativos

LOS SINDICATOS FETE-UGT, FE-CC.OO, ANPE, CSIF, STES-i han suscrito un manifiesto en el que exigen la protección de la enseñanza pública de los recortes presupuestarios y de las consecuencias de la “mala gestión” de la crisis económica.

También critican las decisiones de los gobiernos autonómicos de “recortar” el gasto social, a través del “empeoramiento de las condiciones de trabajo y de la destrucción de empleo público”. Alertan de las reducciones salariales y del aumento de la jornada laboral o de la ratio, la disminución de grupos, la desaparición de programas de ayuda y el refuerzo al alumnado, que “está provocando el recorte de las plantillas de los centros y una fuerte reducción del profesorado interino”.

Estas organizaciones recuerdan, además, que se acaba con la jubilación anticipada, se congelan las ofertas de empleo público docente y se reducen “gravemente” las partidas para gastos de funcionamiento de los centros.